



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2004/NGO/91
3 de marzo de 2004

ESPAÑOL SOLAMENTE

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
60º período de sesiones
Tema 9 del programa provisional

**CUESTIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO**

Exposición escrita* presentada por la Comisión Andina de Juristas, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye de acuerdo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[30 de enero de 2004]

* Esta exposición escrita se distribuye sin editar, en los idiomas, tal como ha sido recibida de la Organización no gubernamental.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú

Antecedentes

1. Entre 1980 y el 2000, el Perú atravesó por uno de los períodos más difíciles de su historia, caracterizada por la violencia terrorista, la violación a los derechos humanos y el total desconocimiento de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Los veinte años del conflicto provocaron enormes perjuicios económicos así como la pérdida de un capital social invaluable para el desarrollo del país.
2. La evolución de la violencia política en el Perú se puede dividir en dos períodos muy marcados. El primero se da entre 1980 y 1992, el cual, a pesar de la fragilidad institucional, estuvo caracterizada por un régimen democrático, por la celebración de elecciones libres y por el respeto a la libertad de prensa. El otro periodo se inicia el 5 de abril de 1992, mediante el cierre y disolución del Congreso por parte de Alberto Fujimori (elegido libremente en 1990), hasta noviembre del 2000. Esta etapa estuvo determinada por el autoritarismo y por la corrupción en todas las instituciones estatales.
3. Con la caída del gobierno de Fujimori en el 2000 y el retorno a la vida democrática, se impulsó una serie de reformas estructurales así como la reinserción del Perú en el sistema internacional. Dentro de estos actos es pertinente destacar el regreso del país a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la suscripción y ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y un arduo proceso de lucha contra la corrupción que persiste hasta hoy, incluyendo la solicitud de extradición de Alberto Fujimori al gobierno de Japón para responder por crímenes de lesa humanidad.
4. Paralelamente a este proceso de reinserción democrática, se abrió un debate en el seno de la sociedad peruana sobre la necesidad de crear una Comisión de la Verdad y Reconciliación (en adelante, "CVR"), para analizar y estudiar las causas de la violencia y evitar que esta situación se vuelva a repetir en el Perú. Bajo este escenario, la Comisión Andina de Juristas promovió activamente la creación de una institución de esta naturaleza.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación

5. La CVR se creó en junio del 2001 con el objetivo de (i) analizar las condiciones políticas, sociales y culturales que crearon las condiciones para que se de este período de violencia, (ii) contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas y de algunos agentes del Estado, y (iii) elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas así como de sus familiares.
6. La CVR se compuso de doce miembros de reconocida trayectoria ética y prestigio en la sociedad e identificadas en la defensa de la democracia y la institucionalidad constitucional. La CVR estuvo compuesta por representantes de la sociedad civil, del ámbito académico, de la iglesia católica, y de las fuerzas armadas.

7. A lo largo de 2 años de investigación, caracterizada por la recopilación de documentos, recepción de testimonios y entrevistas, así como por la celebración de Audiencias Públicas en todo el país, el 28 de agosto del 2003, la CVR presentó su Informe Final a la sociedad y al Presidente de la República, Alejandro Toledo Manrique.

8. Las conclusiones a la que llega la CVR sacudieron a todo el país y uno de sus conclusiones más sorprendentes fue determinar que fueron 69,280 personas las víctimas del conflicto, superando largamente cualquier estadística previa que se tenía hasta ese entonces.

9. La CVR constató la estrecha relación entre pobreza y exclusión social y violencia. En este sentido, el 85% de las víctimas provinieron de los Andes peruanos, una de las zonas más pobres del país. Asimismo, el 75% de las víctimas tenía al quechua u otra lengua nativa como su idioma materno.

10. Uno de los aspectos positivos de todo este proceso es destacar el gran apoyo que la CVR recibió de amplios sectores de la sociedad civil tales como grupo de estudiantes, organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como de la comunidad internacional. Personas de todo el país trabajaron como voluntarios y ofrecieron sus servicios gratuitamente con el objetivo de prestar todo el apoyo posible a la CVR para que pueda cumplir a cabalidad con sus objetivos.

11. Cabe resaltar que la Comisión Andina de Juristas prestó una asistencia constante a la CVR mediante la organización de seminarios, la elaboración de documentos de difusión y de sensibilización, así como la prestación de asesorías técnicas a la CVR en diversos temas ligados a los derechos humanos, destacando la participación del Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas como comisionado de la CVR.

12. Sin embargo, la CVR también ha tenido que afrontar ataques y rechazos de algunos sectores políticos, militares, medios de comunicación e incluso de la iglesia. Esto lleva a la conclusión de que aún queda mucho trabajo por hacer en aras de obtener un proceso de reconciliación nacional.

Los responsables del conflicto

13. La CVR confirmó que el **principal responsable** por las muertes y violaciones a los derechos humanos fue el grupo terrorista Sendero Luminoso, cuando este decide optar por la lucha armada con el objetivo de derrocar el ordenamiento político y jurídico existente. Este grupo terrorista, orientado bajo una doctrina maoísta de extrema izquierda no tuvo reparo en cometer actos de tortura y de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Incluso se considera como responsables de cometer actos de genocidio contra los asháninka, población indígena oriunda de la selva amazónica. Por lo tanto, se concluye que el 54% de las muertes violentas ocurridas en este periodo son atribuidas a este grupo.

14. Asimismo, la CVR también concluyó que la responsabilidad del Estado en el conflicto se dio bajo el ámbito político y militar. En el ámbito político, la clase gobernante fue responsable por su falta de capacidad de liderazgo y de visión para afrontar el problema desde sus inicios

dentro de un marco de legalidad y solamente cuando el conflicto salió de control es que el gobierno decide afrontarlo con el empleo de las fuerzas militares y policiales.

15. En el ámbito militar, y a pesar de reconocer la importancia de los efectivos policiales y militares en la lucha contra el terrorismo, no se puede negar que **en ciertos lugares y momentos del conflicto** la actuación de las fuerzas del orden no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

16. En este sentido, la CVR ha constatado que las violaciones más graves por parte de las fuerzas del orden fueron ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

17. Finalmente, cabe resaltar que contribuyeron en menor medida al desarrollo del conflicto y a violaciones a los derechos humanos el grupo armado MRTA, los Comités de Autodefensa y grupos paramilitares como el “Comando Rodrigo Franco” y el “Grupo Colina”.

Las Recomendaciones y el mecanismo de Reparaciones en el Informe Final de la CVR

18. La labor de la CVR concluyó con la presentación de su Informe Final en la cual (i) se propuso una serie de reformas institucionales, políticas y legales para consolidar la transición democrática, (ii) se presentó documentos y pruebas contra presuntos responsables por violaciones a los derechos humanos para que sean investigadas por las autoridades competentes, y (iii) se recomendó un conjunto de medidas de reparaciones dirigidas a las víctimas del conflicto y sus familiares.

19. Este “Programa Integral de Reparaciones” contiene mecanismos individuales y colectivos, simbólicos y materiales para el resarcimiento de perjuicios. En este línea, se enfatiza sobre instrumentos para: (i) reparaciones simbólicas, el rescate de la memoria y la dignificación de las víctimas, (ii) la atención a la educación y a la salud mental, y (iii) las reparaciones económicas tanto individuales como colectivas.

20. Cabe resaltar que las causas principales de la violencia terrorista tales como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social aún persisten con altos índices en el país. Si no se hace nada para revertir esta lamentable realidad, solamente se fomentará el descontento con el sistema democrático y con el respeto a los derechos y libertades civiles, cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles.

La respuesta del Gobierno del Perú al Informe Final de la CVR

21. A finales de noviembre el Presidente de la República se manifestó sobre el contenido del Informe Final. A pesar de la demora, el gobierno manifestó su apoyo a la labor de la CVR, expresando su voluntad política de implementar las recomendaciones formuladas.

22. Sin embargo, gran parte del éxito de estas medidas depende de los recursos que el Estado y la cooperación internacional puedan aportar para la ejecución de estos programas. En su pronunciamiento, el Presidente hizo énfasis en la necesidad de aumentar la cobertura en las áreas de salud y de educación así como en programas de inversión en las principales zonas afectadas por el conflicto.

23. Hasta la fecha, muy poco se ha hecho para cumplir con este Programa de reparaciones. El gran problema que se debe afrontar es que este Informe, el cual se constituye en una memoria histórica sobre una de las etapas más sombrías de la historia del Perú, pase al olvido y a la indiferencia, evitando que la sociedad lleve a cabo un proceso de reconciliación nacional y de consolidación de la democracia en el país.

Petición a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

24. En este sentido, la Comisión Andina de Juristas solicita a la Comisión de Derechos Humanos que incluya en el informe de su 60º período de sesiones:

- Una condena a la grave situación de violencia política por la cual atravesó el Perú entre 1980 y el 2000, en la cual hubo una violación sistemática a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario así como una abdicación del Estado de Derecho durante el gobierno de Alberto Fujimori.
- Un pronunciamiento sobre la importancia de la labor de la CVR y de su Informe Final para la consolidación de la democracia y del respeto a los derechos humanos.
- Una exhortación al gobierno peruano para que cumpla con las Recomendaciones de la CVR así como con el Programa Integral de Reparaciones a las víctimas del terrorismo.
